

Gobierno confirma respaldo financiero para cuotas de género en elecciones regionales y comunales



La Comisión de Gobierno Interior espera la indicación que presentará el Ejecutivo y que incorporará incentivos para establecer cuotas de género en las elecciones de los consejos regionales y concejos municipales, similares a los que actualmente existen para las parlamentarias.

En la recta

final en la Comisión de Gobierno Interior se encuentra el proyecto (boletín 11.994) que establece cuotas de género para las elecciones regionales y comunales.

La moción, que ya fue despachada de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género,
fue analizada por la instancia, la que aprobó gran parte de su articulado,
donde se establece que no puede haber más de un 60% de candidaturas válidamente inscritas del mismo género.

Durante el debate, se estableció que las cuotas serían solo para quienes integren los consejos regionales y las concejos comunales, dejando de lado las elecciones de alcalde y de gobierno regional.

Frente a ello, la diputada Marcela Hernando (PR), una de las promotoras del proyecto, señaló que no existe ningún lugar del

mando donde exista ley de cuotas para cargos uninominales. “Nos parecía que avanzar con los cores y los concejales en la próxima elección era importante, además, cuando el Ejecutivo está dispuesto a darle viabilidad a través de financiamiento”, precisó.

Dentro de los artículos que quedaron pendientes para votar, se encuentran los que establecen un financiamiento similar al que existe actualmente para las elecciones parlamentarias y que el Gobierno anunció que patrocinaría. Esto implicaría aportes para los partidos por sus candidaturas femeninas y una devolución mayor del porcentaje de votos obtenidos.

“No podemos tener una legislación en materia parlamentaria, de una categoría, y en materia de consejeras regionales o concejalas, de segunda categoría, en el sentido que no inyecte al menos la misma cantidad de recursos que se consideran como un incentivo para el voto como se hace hoy”, señaló la presidenta de la instancia, diputada Joanna Pérez (DC).

Frente a eso, valoró la voluntad del Ejecutivo de presentar una indicación en esta dirección. “Hay que entender que este es un proceso de cuatro elecciones y, luego de eso, cuando ya se aspire a nivelar la cancha, donde hayan más mujeres en cargos de elección popular, esta ley se deja sin efecto o termina su proceso. Por lo tanto, no es algo permanente, es algo acotado en el tiempo”, agregó

la parlamentaria.

El diputado Renzo Trisotti (UDI) respaldó la posición del Gobierno y señaló que esta nueva normativa será un “gran avance para las mujeres, para poder mantener estas cuotas y tener una mayor representatividad de mujeres en cargos de elección popular”.

De acuerdo a lo señalado en la Comisión, el Ejecutivo le dará la urgencia necesaria a la tramitación de este proyecto con el fin de que pueda materializarse en las próximas elecciones municipales y de gobierno regional de octubre de 2020.

Publicado el
22 de agosto del 2019

Alcaldes de todos los sectores se unen en la lucha contra la delincuencia



Declaración

Lo que ha quedado en evidencia esta semana es que hay desigualdad en los recursos con que cuenta cada municipio para hacer frente a los problemas de seguridad

de las comunas.

Los alcaldes que nos hemos reunido esta mañana del 21 de agosto de 2019 hemos concordado una serie de puntos que nos preocupan y frente a los cuales debemos reaccionar ahora.

1. La desigual distribución

de los recursos policiales. Ya en 2009, la prensa de la época señalaba que en la zona oriente de Santiago había una dotación policial, cuatro veces superior a la de otras comunas del Gran Santiago. En la actualidad, de acuerdo con la información que disponemos, las comunas de la zona Oriente doblan en dotación policial por habitante a otras comunas de sectores con más problemas, tanto en la Región Metropolitana como en otros núcleos urbanos del país. Como han señalado algunos estudios, el acceso a la información en Carabineros de Chile respecto a la dotación policial por comuna ha tenido importantes restricciones. Es hora de transparentar dicha información para dar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas.

- Reposición de un programa de prevención del delito de carácter permanente para las municipalidades del país. Desde 2017 que no contamos desde el Estado central, con un programa de seguridad que provea recursos y herramientas a los municipios de forma permanente para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos en los territorios. El presupuesto de la Subsecretaría de

prevención del delito representa un paupérrimo 1.2% del total del presupuesto público para seguridad y justicia. Con este presupuesto ni siquiera alcanza para cubrir necesidades mínimas. Reconocemos otros esfuerzos del gobierno central para proveer tecnología y proyectos por vía de fondos concursables, pero se requiere un esfuerzo mayor y más sostenido en el tiempo. Solicitamos al ejecutivo la reposición de un programa de este tipo, como ha existido en los últimos 20 años.

- Nuevas atribuciones a los municipios, pero sin presupuesto. Se discute en el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades proponiendo nuevas funciones para los municipios en materia de tránsito y violencia intrafamiliar, pero esas funciones no tienen recursos frescos asignados. Es decir, de aprobarse ese proyecto, se generará una nueva desigualdad: solo los municipios con más recursos podrán implementar de forma eficiente esas nuevas funciones. Solicitamos a los presidentes de la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados y del Senado estudiar seriamente esta situación y corregirla.
- Mayor tasa de homicidios en núcleos urbanos. De acuerdo con el estudio mundial de homicidios (ONU, 2019) Chile tiene una tasa baja de homicidios (3,7 por cada 100 mil habitantes) comparada

en el continente americano. Sin embargo, esta ha ido subiendo (en el mismo estudio, 2013, la cifra era de 2,7) y se concentra en comunas de núcleos urbanos. Solicitamos al ministerio del interior la constitución de una mesa de trabajo policial cuyo foco sea la seguridad en nuestras comunas y barrios adoptando medidas inmediatas para que hechos como los sucedidos en Puente Alto no se repitan.

- Barrios y narcotráfico. Valoramos la iniciativa del gobierno de priorizar 33 barrios. Sin embargo, la realidad de penetración del narcotráfico la vuelve insuficiente. De acuerdo con cifras informadas por el ministerio público, en 2017 había 174 barrios considerados como críticos. En estos barrios se concentraban varios factores como falta de prevención o alta concentración de denuncias. De acuerdo con otros estudios también en este tipo de barrios hay una alta incidencia de delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar, además de graves falencias en conectividad, viviendas y áreas verdes, lo que revela la importancia de que los municipios cuenten con recursos para intervenir en estos espacios públicos. Por estas razones, solicitamos a la Subsecretaría de Prevención del Delito aumentar de 33 a 50 los barrios priorizados.
- Seguridad para todas las comunas del país. Sería injusto señalar

que este es un problema de la región metropolitana o de los principales núcleos urbanos del país. En distintas localidades, aún las más apartadas, la realidad del microtráfico o la comisión de otros delitos de carácter rural, tales como el abigeato o el robo de cables, preocupan a nuestras autoridades locales. Es necesario que exista un plan nacional de seguridad que de cuenta de la diversidad de realidades de nuestro país.

Revaluar el Fondo Común Municipal.

Estamos conscientes de que los recursos son escasos frente a las muchas demandas. Sin embargo, existe en el Estado de Chile un instrumento que permitiría redistribuir y apoyar a las comunas: el Fondo Común Municipal (FCM).

Es necesario que el Estado

Cámara despachó al Senado proyecto de integración social y urbana



La iniciativa del Ejecutivo persigue la integración social y la equidad territorial, al tiempo que otorga nuevas facultades al Ministerio de la Vivienda, en materia de planificación de las

ciudades .

Tras un amplio debate, la Sala aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que **modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana** (boletín 12.288) .

El texto, cuyo informe de la Comisión de Vivienda fue rendido por el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), pretende mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país. Para ello, se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Con tal objeto, se busca modificar la Ley 16.391, que Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, proponiendo su cambio de nombre por el de Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio.

El texto **contempla tres nuevas funciones ministeriales que fueron adicionadas durante el trámite en la Comisión**. En ellas, se faculta al Ministerio para implementar políticas de suelo y programas habitacionales que propicien la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, junto con establecerle la obligación de

resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios y disposiciones para la integración e inclusión social urbana.

Por otra parte, establece que los nuevos planes reguladores comunales o sus modificaciones integrales o actualizaciones deben contemplar disposiciones que incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado y a otras personas o familias en situación de vulnerabilidad.

En el mismo contexto, se aprobó la incorporación de un nuevo artículo que señala que **no solo esta secretaría de Estado podrá establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas**.

El proyecto establece, además, que los beneficios de normas urbanísticas en polígonos que incluyan inmuebles en sectores que se encuentren protegidos en la categoría de monumentos históricos, zona típica, de conservación historia no podrán afectar los valores y atributos, por los cuales dichos monumentos, zonas o inmuebles fueron protegidos.

En línea con lo anterior, se estableció que los proyectos de viviendas integradas, que pretendan acogerse a beneficio normativo en tales inmuebles o sectores deben obtener permisos municipales y autorizaciones sectoriales.

Otras consideraciones

La iniciativa también faculta a los Serviu para concesionar, mediante licitación pública, la construcción, administración y mantenimiento de viviendas económicas en terrenos de su propiedad o de otros órganos o servicios de administración del Estado. Dicha concesión otorgará a su titular un derecho real de uso y goce sobre el inmueble por un período determinado y sujeto a la condición de destinar un porcentaje de las viviendas a beneficiarios del programa del subsidio de arriendo.

El Ministerio, a través de los Serviu, agrega el proyecto, podrá otorgar subsidios de los programas habitacionales vigentes a personas jurídicas de derecho público o derecho privado, sin fines de lucro, que tengan por objeto construir viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas, destinadas a beneficiarios del programa de subsidio de arriendo.

Durante la votación, la Sala rechazó una parte del texto propuesto por el Ejecutivo, donde se le permitía a la cartera ejercer la función de dictar ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos, construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y planificación urbanos y cooperativas de viviendas.

Asimismo, la función de supervigilar todo lo relacionado con

la planificación
urbana, planeamiento comunal e intercomunal y sus respectivos
planes
reguladores, urbanizaciones, construcciones y aplicaciones de
leyes pertinentes
sobre la materia.

Publicado el
14 de agosto del 2019

Comisión de Constitución debate proyecto que declara el litio de interés nacional



En la comisión de Constitución de la Cámara, el ministro de Minería, Baldo Prokurica reiteró que la moción genera un daño a las políticas del Estado para exportar estos productos. Por su parte, el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, también expuso su negativa a la moción.

La Comisión de Constitución de la Cámara está encargada de analizar la moción que **declara de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio**, así como toda operación emanada de su explotación y cuyo titular del contrato sea persona natural o jurídica (boletín 10638).

En la pasada sesión estuvieron presentes el ministro de

Minería, Baldo Prokurica; el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas; y los abogados de Derecho Constitucional, Jorge Correa Sutil y Arturo Fernandois, los que en **general consideraron negativa la propuesta.**

En la comisión se habló respecto del punto político al que podría aludir el proyecto tras lo ocurrido con Corfo y SQM y los cuestionamientos por el financiamiento irregular de campañas políticas.

Frente a esto el diputado Tomás Hirsch (PH) señaló que el único castigo lo ha recibido el pueblo chileno, una vez que le fue expropiado el litio.

“Ya sabemos el escándalo que ha significado Soquimich a través de la historia.

El señor Ponce Lerou se autoregaló una empresa que le pertenecía a todos los chilenos. Luego, vinieron escándalos como el ‘caso cascadas’ y ni hablar de todo lo que significó el financiamiento irregular a la política”, puntualizó.

En ese sentido, subrayó que **el litio es estratégico y que corresponde que vuelva a manos del Estado donde estuvo alguna vez.**

“El litio pertenece al Estado y de algún modo está entregado en arriendo, pero eso significa un beneficio gigantesco. No por nada SQM es una de las empresas más grandes del mundo en el área de minería”, sentenció.

Ante este escenario, el parlamentario cree que se está

buscando un cierto resquicio, desde el punto de vista constitucional, ya que se puede argumentar a favor o en contra desde ese ámbito. Sin embargo, consideró que es un hecho de fondo que todos los países están buscando tener control sobre el mineral estratégico y Chile hoy no lo tiene.

Visión oficialista

Por el contrario, el diputado Francisco Eguiguren (RN) valoró la presentación de los invitados porque habrán dejado claro que se trata de un proyecto inconstitucional.

“Este proyecto no va a lograr ningún objetivo porque lo que se pretende ya está contemplado desde el año 79, cuando se le declaró reservado al Estado, por lo que cualquier iniciativa es vana”, remarcó.

Planteó que la ley orgánica constitucional que lo declara de reserva nacional es mucho más amplia y mucho más importante que la de interés nacional. Por lo tanto, **si se quiere salvaguardar el litio eso ya está logrado.**

“Ahora, si se quiere expropiar el litio, digámoslo con todas sus letras; que se quieren expropiar empresas del Estado, pero el perjuicio que vamos a tener desde el punto de vista económico para el país es enorme”, planteó, agregando luego que “los inversionistas no se van a fijar en Chile; van a arrancar de Chile, porque nadie quiere invertir en un lugar donde después les van a

expropiar la propiedad".

En cuanto al mandato del grupo legislativo, este es amplio, según se informó en la sesión, por lo tanto, los parlamentarios pueden examinar la iniciativa, ver su constitucionalidad e introducir indicaciones.

Incluso se evalúa ampliar el plazo destinado a su análisis con el fin de conocer en detalle distintas visiones con respecto a la iniciativa que busca declarar el litio de interés nacional.

Publicado el
14 de agosto del 2019

Cámara pide crear programa nacional de familias de acogida para el adulto mayor



La resolución plantea la necesidad de procurar los cuidados, afectos y protección que requieren las personas de la tercera y cuarta edad, ya sea en forma temporal o cuando exista alguna medida judicial que haya ordenado la separación del medio familiar directo.

Por 101 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó pedir al Ejecutivo que los ministros de Desarrollo Social y Secretario

General de la Presidencia, coordinen y realicen los estudios para crear un programa nacional de familias de acogida para el adulto mayor.

Los diputados RN Catalina Del Real, Sofía Cid, [Jorge Rathgeb](#), [Hugo Rey](#), [José Miguel Castro](#) y [Cristóbal Urruticoechea](#); DC Jorge Sabag; y PC Daniel Núñez plantean que el programa debe ser subsidiado por el Estado y coordinado por el Senama.

La resolución 477 añade que el propósito es procurar -mediante una familia alternativa- los cuidados, afectos y protección que requieren las personas de la tercera y cuarta edad, ya sea en forma temporal o cuando exista alguna medida judicial que haya ordenado la separación circunstancial, transitoria o permanente del medio familiar directo.

Los datos aportados indican que, por cada niño o niña, hay 10 ancianos abandonados; 330 mil adultos mayores viviendo solos; y uno de cada tres sufre algún tipo de maltrato.

Publicado el
09 de agosto del 2019

22 nuevos proyectos de ley

ingresaron diputados y diputadas en la cuarta semana de julio



Publicado el 26 de julio del 2023Entre las iniciativas se abordan materias relativas a licencias médicas, comercio por plataformas digitales, deporte, trata de personas, ocupación ilegal, reciclaje, copropiedad inmobiliaria y educación.

Un total de 22 nuevas propuestas legislativas fueron ingresadas a trámite legislativo a la Cámara de Diputados y dadas a conocer en las cuentas de la Sala de las sesiones de la cuarta semana de julio.

Las propuestas son las siguientes:

1. Para modificar la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, para determinar el plazo máximo para su pago (boletín 12781). De los/as PR Fernando Meza; DC Gabriel Ascencio y Víctor Torres; independiente Pepe Auth; PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis; RN Gonzalo Fuenzalida; PL Vlado Mirosevic; PS Marcelo Schilling; y PC Camila Vallejo.
2. Para exigir del comercio minorista que se desarrolla a través de plataformas digitales, proveer al público información, transparente y de libre acceso, sobre los precios de los productos que comercializa (boletín 12782). De los/a PR

Fernando Meza y Marcela Hernando; DC Gabriel Ascencio; independiente Pepe Auth; UDI Jaime Bellolio; PPD Tucapel Jiménez; PL Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic; y PS Leonardo Soto.

3. Para exigir que en el Registro de Vehículos Motorizados se consigne el número de siniestros que cada vehículo haya sufrido (boletín 12783). De los UDI Javier Hernández, Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Joaquín Lavín, Javier Macaya, Nicolás Noman e Iván Norambuena.

4. Para disponer la realización de partidos preliminares de las categorías de fútbol femenino y juvenil, con ocasión de los partidos oficiales de la primera división A, del fútbol profesional chileno (boletín 12784). De las/os independientes Marisela Santibáñez y Érika Olivera; RD Natalia Castillo; PPD Cristina Girardi; PC Daniel Núñez y Camila Vallejo; PH Florcita Alarcón; RN Gonzalo Fuenzalida; FRVS Jaime Mulet; y REP Ignacio Urrutia.

5. Para modificar el Código Penal, para aumentar las penas asignadas a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (boletín 12785). De los UDI Renzo Trisotti, Sandra Amar, Jorge Alessandri, Nino Baltolu, Álvaro Carter, Sergio Gahona, Iván Norambuena, Gustavo Sanhueza y Osvaldo Urrutia, más el RN Gonzalo Fuenzalida.

6. Para modificar la Ley 20.380, sobre Protección de los animales, para regular las carreras de perros (12786). De los independientes [Pablo Prieto](#); UDI Pedro Pablo Alvarez-Salamanca; PPD Ricardo Celis; PS Fidel Espinoza; DC Pablo Lorenzini y Jorge Sabag; PR Fernando Meza y José Pérez; Evópoli Andrés Molina; y RN Diego Paulsen.

7. Para modificar el Código Penal, para aumentar las penas asignadas al hurto falta y adecuar su tipificación (boletín 12787). De los/as UDI Cristhian Moreira, Sandra Amar, Jorge

Alessandri, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter, Patricio Melero y Virginia Troncoso; DC Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi; y RN Gonzalo Fuenzalida.

8. Para modificar el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en determinados casos (boletín 12788). De los RN Diego Paulsen, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; independientes Pablo Prieto y René Saffirio; y DC Matías Walker.

9. Para modificar el Código Penal para establecer una nueva hipótesis y un nuevo plazo de flagrancia para el delito de ocupación ilegal de inmuebles (boletín 12789). De los RN Diego Paulsen, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb; independientes Pablo Prieto y René Saffirio; y DC Matías Walker.

10. Para obligar a los establecimientos comerciales a implementar embalajes reciclables para el transporte de los productos, sin costo para el cliente final (boletín 12790). De los PR José Pérez, Carlos Abel Jarpa y Marcela Hernando; RN Mario Desbordes, Andrés Longton y Diego Paulsen; DC José Miguel Ortiz, Jorge Sabag y Víctor Torres; e independiente Pablo [Prieto](#).

11. Para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, para sancionar la interposición de denuncias o recursos temerarios ante la Comisión de Ética y Transparencia (boletín 12791). Del independiente Renato Garín.

12. Para generar mayor transparencia y participación de los copropietarios en la administración de condominios y promover una mayor equidad de género en la composición de sus órganos internos (boletín 12792). De los independientes Renato Garín y Gonzalo Winter; y PH Florcita Alarcón.

13. Para exigir que en la publicidad de las operaciones de crédito de dinero se incluyan consejos para educar sobre el endeudamiento responsable (boletín 12793). De los/a independiente Renato Garín; PH Florcita Alarcón; PEV Félix González; RN Harry Jürgensen; UDI Joaquín Lavín; PR Alexis Sepúlveda; y RN Ximena Ossandón.

14. Para modificar la Ley 20.216, que Establece normas en beneficio del circo chileno, para prohibir la utilización de animales en espectáculos circenses De los independientes [Renato Garín](#) y [René Alinco](#); PH [Florcita Alarcón](#); y PPD [Andrea Parra](#).

15. Para impedir la integración vertical entre prestadores de salud e isapres, y entre laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de unos y otros, por un mismo controlador (boletín 12798). De los/as RD Miguel Crispi; PS Juan Luis Castro; PPD Ricardo Celis; RN Jorge Durán y Ximena Ossandón; independientes Diego Ibáñez y Patricio Rosas; PC Amaro Labra; DC Daniel Verdessi; y Comunes Claudia Mix.

16. Para dictar normas sobre prevención, fiscalización y sanción de la contaminación por malos olores y modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente al respecto (boletín 12799). De las/os DC [Joanna Pérez](#), Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Daniel Verdessi; PS Daniella Cicardini; RD Catalina Pérez; RN José Miguel Castro; independiente Renato Garín; Evópoli Andrés Molina; y UDI Celso Morales.

17. Para disponer el cobro de arancel proporcional y prohibir la denegación de títulos y grados académicos en razón de deudas impagadas de los estudiantes, en determinados casos (boletín 12801). De las/os RN Paulina Núñez, Luis Pardo, Frank Sauerbaum y Diego Schalper; PPD Cristina Girardi; Comunes Camila Rojas; PC Camila Vallejo; UDI Jaime Bellolio; RD Giorgio Jackson; y DC Mario Venegas.

18. Para instituir el 1 de agosto de cada año como el Día

Nacional de la Gratitud (boletín 12802). De los RN Diego Schalper y Evópoli Luciano Cruz-Coke.

19. Para modificar el Código Orgánico de Tribunales para ofrecer una nueva opción de práctica profesional a los postulantes al título profesional de abogado (boletín 12803). Del independiente Renato Garín.

20. Para modificar la ley General de Bancos en materia de plazos para el pago y la oposición del deudor y de remate o adjudicación de inmuebles, en juicio hipotecario (boletín 12804). Del independiente Renato Garín.

21. Para modificar la Carta Fundamental para incluir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre aquellos amparados por la acción constitucional de protección (boletín 12805). De la/os RN Francesca Muñoz, Mario Desbordes y Eduardo Durán; DC Miguel Ángel Calisto e Iván Flores; y UDI Juan Antonio Coloma.

22. Para modificar el Código Sanitario para posibilitar la fijación de precios de referencia de los productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, entre otros, así como determinados elementos de uso médico (boletín 12800). De los/a PS Marcelo Díaz y Maya Fernández; RD Miguel Crispi; e independiente Patricio Rosas.

Publicado el
26 de julio del 2019

Sala analizó servicio de

empresas sanitarias con especial foco en el reciente caso de Osorno

La sesión especial, que tomó como particular objeto del debate los problemas ocurridos en la planta de tratamiento de agua potable de ESSAL S.A., contó con la participación de los ministros de Economía, de Salud y de Obras Públicas. En la oportunidad se aprobaron siete resoluciones que, entre otros puntos, piden se termine con la concesión a la empresa e indemnice a la ciudadanía.

Analizar el funcionamiento en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A. y los problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que han ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno, fue el objeto de la sesión especial celebrada esta tarde en la Cámara de Diputados.

El debate, iniciado a las 17:00 horas, fue abierto por los cuatro representantes de la zona afectada, los diputados Javier Hernández (UDI), Emilia Nuyado (PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).

Javier Hernández sostuvo que, durante diez, los 180 mil habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y humillación por parte de una empresa sin escrúpulos, que optó

por la ganancia
en vez de la responsabilidad social. “ESSAL se comportó como predador de la codicia; ...no les importó la salud de los habitantes sino solo ocultar su negligencia, a esta altura descarada”

Pidió, en representación de los chilenos afectados, que ESSAL se vaya de Osorno y que el Ejecutivo promueva una ley de Osorno, para resarcir el perjuicio económico y moral provocado.

Emilia Nuyado lamentó que el intendente no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno y que el Gobierno no haya declarado en la oportunidad “zona de catástrofe”. Criticó que no se escuchara la voz de la ciudadanía y que se evitara con ello mayores complicaciones como las que después se vivieron y que afectaron principalmente a las personas más humildes que no tenían para comprar agua embotellada o a los adultos mayores que no se podían trasladar con facilidad a los centros de distribución.

Criticó que no se contara con planes de contingencia y que la empresa no tuviera capacidad de responder en la contingencia. En dicho plano, coincidió en que se debe caducar la concesión de la empresa, discutir la nacionalización del agua y revisar la situación de todas las sanitarias de Chile, para evitar lo ocurrido en Osorno en otra comuna.

[Harry](#)

Jürgensen sostuvo que es impresentable la situación de precariedad con la que operaba la empresa, sin generador de respaldo y con maniobras para evitar pagar la tarifa eléctrica de invierno, que finalmente propiciaron el derrame de petróleo. "Era una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a estallar", remarcó, criticando que ello sucediera a la vista de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras instituciones del país que deberían haber fiscalizado estas situaciones.

Estimó que la decisión del Gobierno fue clara y fuerte, presionando a ESSAL a realizar las acciones correspondientes con la mayor premura posible, pese a las mentiras y dilaciones promovidas por la empresa. Además, pidió que se le apliquen las mayores sanciones posibles a la sanitaria, incluyendo la caducidad de la concesión, y que el Estado tenga protocolos que pueda activar frente a este tipo de situaciones.

En tanto, Fidel Espinoza criticó que la demora que se tomó en abordar la crisis en Osorno no habría pasado en la capital y llamó a que se entreguen respuestas y soluciones a lo que calificó como una de las peores crisis de la zona. Asimismo, criticó que, al día de hoy, el único culpado sea un trabajador que laboraba en una precaria situación y que no se le asignen las responsabilidades que corresponden a los directivos de

ESSAL que quisieron economizar plata a costo de los usuarios.

Dijo que acá se deben aplicar sanciones severas y exemplificadoras para una empresa que opera con sistemas obsoletos, pero que obtiene ganancias millonarias. Planteó que, si no es posible la caducidad, que al menos se apliquen millonarias indemnizaciones para levantar un plan Osorno, que le permita recuperarse.

En el debate también participaron los/as diputados/as Jaime Mulet (FRVS), Renato Garín (IND), Gabriel Ascencio (DC), Carlos Kuschel (RN), Andrés Molina (Evópoli), Alejandro Bernales (PL), José Pérez (PR), Amaro Labra (PC), Catalina Pérez (RD), Ricardo Celis (PPD), Leonidas Romero (RN), Nicolás Noman (UDI), Diego Ibáñez y Alejandro Santana (RN).

Resoluciones

En la oportunidad se aprobaron sietes resoluciones dirigidas al Presidente de la República:

-674: que solicita aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria a ESSAL.

-675: que pide el despliegue de acciones con el objeto de proteger y compensar la situación que afecta a la comunidad de Osorno, luego del corte del servicio de agua potable imputable a la empresa concesionaria de este servicio.

-676: que establezca a la brevedad máxima una mesa público

privada con pequeños y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el desabastecimiento de agua potable en Osorno, para asegurar una pronta indemnización de los perjuicios sufridos y también para reactivar sus emprendimientos, profesiones y oficios.

-677: caducar la concesión a ESSAL y enviar a la brevedad proyectos para de ley para fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia.

-678: que manifiesta la preocupación por la emergencia sanitaria que afecta a los habitantes de Osorno y solicita el término definitivo de la concesión de la empresa y la indemnización de las familias afectadas.

-679: que se envíe un proyecto de ley que garantice la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable.

-680: que impulse las modificaciones legales para facultar a la Superintendencia o a la autoridad pertinente, la facultad de nombrar un administrador adjunto en las empresas sanitarias en las situaciones que se vea gravemente afectado el servicio sanitario para los usuarios.

Ejecutivo

A la sesión concurrieron los ministros de Economía, de Obras Públicas y de Salud, Juan Andrés Fontaine, Alfredo Moreno y Jaime Mañalich, respectivamente.

Además, participaron el superintendente de Servicios

Sanitarios (S), Jorge Rivas; y el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar.

El ministro Jaime Mañalich llamó a no minimizar lo que significa una alerta sanitaria y todas las acciones que pueden ser emprendidas en dicho contexto y que, finalmente, evitaron que se produjera un brote de enfermedad infecciosa en la zona. Sostuvo que un calificación de estado de excepción no habría ayudado en materia de Salud, ya que está dirigida a otros fines, y afirmó que se cumplió con la misión.

Juan Andrés Fontaine informó que se iniciará por parte del Sernac un proceso voluntario colectivo que partirá con la recepción de antecedentes de daños por parte de los afectados y su estimación, para continuar con la fijación de las compensaciones. Acotó que este proceso será llevado tanto para persona naturales como para las micro y pequeñas empresas y anunció que mañana será la primera reunión con representantes de la empresa. De no haber acuerdo, especificó, se continuará con un proceso ante la justicia.

Finalmente, el ministro Moreno calificó el evento ocurrido en Osorno como una enorme crisis y negligente y dijo compartir a nombre del Gobierno la indignación de los habitantes y la preocupación que expresaron los diputados.

Resaltó que, ante el hecho, ministros y subsecretario, así como el

superintendente de servicios sanitarios acudieron al lugar y estuvieron todo el tiempo necesario para superar la emergencia, al igual que el intendente y los seremis, que celebraron dos comités de emergencia al día.

Junto con comunicar diversas acciones de apoyo a la ciudadanía, dijo que se inició un proceso de fiscalización a la empresa cuya planta fue completamente contaminada, así como también a todas plantas existentes en el país, de modo de evitar situaciones similares.

Remarcó que se aplicarán las sanciones más severas que establece la ley, dada la gravedad de los hechos. En este plano recordó que la ley establece un máximo de 600 millones de pesos, pero no solo por el corte de abastecimiento, sino por cada infracción cometida, por lo cual se está evaluando cuántas y cuáles son estas y su nivel de gravedad, para establecer la sanción que merecen.

Finalmente, entre otros puntos, anunció que, si bien ya existe en trámite una reforma de los servicios sanitarios, se ingresará un proyecto nuevo sobre la materia que contemplará la aplicación de mayores sanciones, que entregará más atribuciones y recursos a la Superintendencia y que buscará evitar la vulnerabilidad del sistema.

Publicado el
24 de julio del 2019

Congreso despide a periodista Fidel Oyarzo



En la sala de sesiones del Senado, en el edificio del Congreso en Santiago, están siendo velados los restos del periodista Fidel Oyarzo Salgado (57), quien se desempeñara en Televisión Nacional de Chile, en la cobertura de noticias en el parlamento.

El profesional, rostro emblemático de la televisora estatal desde el restablecimiento de la democracia en 1990, falleció este domingo a consecuencia de un cáncer que lo mantenía internado de gravedad en la Clínica Indisa.

Durante la jornada, una gran cantidad de autoridades, encabezadas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, personeros del quehacer político y público en general, ha llegado hasta la sede de Santiago del Congreso para despedir sus restos, los cuales serán finalmente sepultados en la ciudad de Osorno.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), lamentó la partida de Fidel Oyarzo. "Lo que yo creo que nos va a acompañar por mucho tiempo es la figura de Fidel y lo que él construyó en la Cámara y en el Congreso Nacional en general, porque esas son

las cosas que al final mantienen a una persona, lo buenos recuerdos”.

Continuó el legislador: “Alguien dijo que nadie verdaderamente muere hasta que no se le olvida y creo que a Fidel no le se olvidará por varias razones y la más importante, porque contribuyó a nuestra sociedad nacional, a través de su trabajo, en distinto medios de comunicación”.

Por su parte, el diputado Patricio Melero (UDI), recordó su amistad desde inicio de los 90 largos años. “Él debutaba en el Congreso como periodista de la Radio Cooperativa y yo debutaba en el Hemiciclo de la Cámara y ahí nos conocimos y ,desde esa época, se fue generando una relación de respeto recíproca, de amistad; pero nunca de complicidad, en el sentido de que él evitara preguntarme o interrogarme con toda sagacidad. Yo siempre agradecí la objetividad que mantuve en el ejercicio de la profesión”.

En honor al destacado periodista, la sala de la prensa acreditada de la Cámara de Diputados en Valparaíso pasará a llamarse Sala Fidel Oyarzo, desde el próximo jueves 25 de julio.

Publicado el
22 de julio del 2019

Comisión aprobó proyecto de cuotas de género para elecciones municipales y de gobierno regional



La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó a su par de Gobierno Interior la moción que establece para las próximas cuatro elecciones una cuota tope de 60% de candidaturas del mismo género para los cargos de elección de autoridades comunales y regionales.

Un importante paso dio el proyecto ([boletín 11994](#)) que establece cuotas de género para las elecciones de los cargos de alcalde, concejales, gobernadores y el consejo regional. **La Comisión de Mujeres y Equidad de género despachó la moción poniendo un énfasis importante en la necesidad de otorgar financiamiento a las candidatas y los partidos que las nominen.**

“Creo que es muy necesario establecer en el proyecto de ley los mecanismos de financiamiento, de igual manera como fueron incorporadas en la actual ley de elecciones parlamentarias. Es decir, un incentivo económico, ya sea al partido,

pero también un numeral distinto para mujeres candidatas”, planteó la diputada [Loreto Carvajal](#) (PPD).

La legisladora, una de las autoras de la propuesta, estima que, dicha forma, se motiva también a que los partidos puedan generar condiciones previas, ya sea de capacitación y búsqueda de lideresas.

La parlamentaria señaló que, de acuerdo a lo expresado por los ministros durante el debate en la instancia, es importante darle urgencia a este proyecto, “para que finalmente tengamos esta ley de cuotas operativa antes de las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales”.

Para la diputada [Sandra Amar](#) (UDI), no fue fácil respaldar esta propuesta de sus pares, pues consideraba que era más relevante ver la capacidad que tiene la mujer más que llegar a un cargo por la cuota de género. “Pero la experiencia lo ha ido demostrando y me han hecho cambiar de opinión, pues una forma de poder introducirnos a este mundo político es poder establecer una ley de cuotas de género”, evaluó.

Desde esta perspectiva, la diputada dijo respaldar la necesidad de entregar un financiamiento especial a estas modificaciones, que vayan en la línea de los recursos que se cuentan para las elecciones parlamentarias, sobre todo poniendo

énfasis en las capacitaciones a mujeres que tengan proyección a futuro.

Dentro de las indicaciones aprobadas en el trámite en esta Comisión fue respaldada, por unanimidad, la propuesta de la diputada [Maite Orsini](#) (RD), que permite solucionar un conflicto que podría generarse en las elecciones para los cargos de alcalde y gobernador regional.

En estos casos, la norma establece que solo podrán participar en primarias hasta un 60% de estas candidaturas, con el fin de asegurar que los cupos que no se llenen por esta vía permitan expresar la cuota de género establecida por ley para las elecciones. De esta manera, se asegura que la norma sea efectiva.

Publicado el
19 de julio del 2019

Comisión de Trabajo despachó a su par de Hacienda reforma previsional



Entre los puntos sancionados destaca la aprobación, con votos del oficialismo, la DC y el PS, del nuevo Consejo de Administración de Seguros Sociales, ente público que

administrará el 4% de ahorro previsional y otros seguros sociales que crea el proyecto.

Tras un largo y accidentado trámite, la [Comisión de Trabajo](#) de la Cámara de Diputados concluyó la votación en particular del proyecto que busca reformar el sistema previsional y que, entre sus objetivos, contempla mejorar las pensiones del sistema solidario y de capitalización individual ([boletín 12212](#)).

La propuesta legal, [ingresada a trámite por el Ejecutivo](#) en noviembre de 2018 y ahora enviada a trámite a la [Comisión de Hacienda](#), tuvo su mayor traspie cuando [la oposición mayoritaria en Trabajo la rechazó en general](#), el pasado 14 de mayo, obligando a un pronunciamiento de [la Sala que vino a dar su visto favorable](#) el 16 de mayo, luego de tres sesiones de debate.

Desde ese momento, el citado grupo parlamentario, bajo una nueva presidencia (la diputada independiente Gael Yeomans reemplazó al DC Raúl Soto), inició un intenso análisis del articulado y de las indicaciones presentadas, concluyendo en el día de hoy, tras más de cinco horas de labor, el despacho del proyecto.

Ente público

Uno de los puntos centrales de la presente discusión giró en torno a la [aprobación del nuevo Consejo de Administración de Seguros Sociales \(CAS\)](#),

por ocho votos a favor del oficialismo, la DC y el PS; cuatro en contra, de otros legisladores de la oposición; y una abstención del PPD.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, explicó que este nuevo ente público administrará el 4% de ahorro previsional adicional y los seguros sociales, como el de acompañamiento o ley Sana, y los que se crearán para la mujer de clase media, el de longevidad y el de dependencia, entre otros. Acotó que se tratará de una entidad autónoma, con personalidad jurídica y financiamiento propio, y que tiene rango constitucional para su aprobación (4/7).

La Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, señaló que el CAS será un órgano que podrá subcontratar servicios con otras instituciones, por ejemplo el IPS, y dictará la política de inversión de la Administración del Ahorro Previsional (APA).

Explicó que, en los primeros cinco años, el organismo podrá licitar la gestión del 4% a diversos agentes de inversión, como cajas de compensación, cooperativas y compañías de seguros de vida, entre otros. Luego de ese plazo, la entidad podrá administrar el 4% de ahorro previsional.

Visión fiscal y parlamentarias

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, agradeció la posibilidad de lograr

acuerdos e informó que se aumentan significativamente los recursos en 100 millones de dólares respecto del proyecto original, para mejorar las pensiones solidarias desde enero de 2020.

Desde el oficialismo, reconocieron el acuerdo logrado con parte de la oposición, para avanzar en la mejora de las pensiones solidarias y el incremento de las pensiones, según destacaron los diputados UDI Patricio Melero y Guillermo Ramírez y el RN Alejandro Santana.

Los diputados de oposición que respaldaron la creación del Consejo de Administración de Seguros Solidarios justificaron su votación y anunciaron que esperan que el Gobierno se allane a subir el porcentaje solidario hoy fijado en 0,2 %.

En tanto, la diputada Gael Yeomans estimó que, con los votos de oposición que apoyaron las indicaciones del Ejecutivo, solo se postergó una negociación, ya que el contenido de la iniciativa no cambió en lo sustancial. Sostuvo que será un aumento de pensiones "insignificante" y que las AFP seguirán operando detrás del velo de las compañías de seguro en la administración del 4%.

El proyecto de reforma previsional y que mejora las pensiones seguirá con suma urgencia para su tramitación (quince días para su discusión), según explicó el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel. Expresó que esperan

que en agosto el
proyecto pase al Senado, para ser despachado del Congreso en
octubre, ello con
el fin de alcanzar a subir las pensiones solidarias en enero
de 2020.

Publicado el
18 de julio del 2019